



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR

Procedimiento iniciado de oficio

EXPEDIENTE: 10/2021-PSO-CG

DENUNCIADOS: Otrora partido político Fuerza por México y ciudadano David Huerta Jasso.

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

AUTORIDAD RESOLUTORA: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato catorce de julio de dos mil veintitrés¹.

Resolución que dicta el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la que se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México y se determina la **inexistencia** de infracción del ciudadano David Huerta Jasso, respecto de la omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada en la sindicatura suplente en el municipio de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

GLOSARIO

Comisión de Quejas y Denuncias:

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Consejo General:

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Constitución:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INE:

Instituto Nacional Electoral

Instituto:

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

¹ Todas las fechas que se citan enseguida corresponden al año 2023, salvo precisión en contrario.

<i>Ley electoral local:</i>	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Ley de partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género:</i>	Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género
<i>Partes denunciadas:</i>	Otrora partido político Fuerza por México y ciudadano David Huerta Jasso.
<i>Reglamento de quejas y denuncias:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Secretaría Ejecutiva:</i>	Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Tribunal electoral local:</i>	Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
<i>UTJCE o autoridad sustanciadora:</i>	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

ANTECEDENTES

I. Reforma federal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, de la *LGIPE*, de la *Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral*, de la *Ley de Partidos*, de la *Ley General en Materia de Delitos Electorales*, de la *Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República*, de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* y de la *Ley General de Responsabilidades Administrativas*.

II. Aprobación de lineamientos por parte del INE, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el

Consejo General del *INE* aprobó el acuerdo INE/CG517/2020, por el cual se emitieron los *Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*, en los que se incluyó la obligación de presentar los formatos «3 de 3 contra la violencia».

III. Reforma local en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la reforma a diversos artículos de la *Ley electoral local*, entre las que destaca la atribución de este *Consejo General* para vigilar que las actividades de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley y a los lineamientos que emita el mismo *Consejo General* para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

IV. Aprobación de los lineamientos por parte del *Instituto* en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo CGIEEG/035/2021, mediante el cual se emitieron los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

V. Aprobación de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021* y del modelo de formato «3 de 3 contra la violencia». En la sesión extraordinaria del nueve de marzo de dos mil veintiuno, este *Consejo General* aprobó el acuerdo CGIEEG/077/2021, mediante el cual se emitieron los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*. Cabe destacar que, en dichos lineamientos se contempló el modelo de formato «3 de 3 contra la violencia».

VI. Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia». En la sesión ordinaria del treinta de junio de dos mil veintiuno, el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, otrora consejero presidente de este *Instituto* presentó el *Informe final correspondiente a la presentación del formato “3 de 3 contra la violencia” por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas*

independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno.

De dicho informe, se desprendió que cuatro partidos políticos no presentaron tal formato en cinco candidaturas, a saber:

PARTIDO POLÍTICO	MUNICIPIO	CARGO
Movimiento Ciudadano	Celaya	Regiduría suplente 5
	Dolores Hidalgo C.I.N.	Sindicatura propietaria
Morena	Villagrán	Regiduría propietaria 4
Partido Encuentro Solidario	Irapuato	Regiduría propietaria 4
Fuerza por México	Romita	Sindicatura suplente

VII. Acuerdo que ordena dar vista a la *UTJCE*. Con base en el informe referido en el punto anterior, en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, este *Consejo General* emitió el acuerdo CGIEEG/309/2021, mediante el cual se ordenó dar vista a la *UTJCE*, respecto de la omisión de presentar del formato denominado «3 de 3 contra la violencia». Lo anterior, con el propósito de que se sustanciaran los procedimientos sancionadores ordinarios respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

VIII. Vista por parte de la *Secretaría Ejecutiva*. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la *UTJCE* el oficio SE/2996/2021, signado por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, Secretaria Ejecutiva de este *Instituto*, por medio del cual remitió a la *autoridad sustanciadora* copia certificada del acuerdo CGIEEG/309/2021, así como del *Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia»*, por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado del 6 de junio de 2021.

IX. Radicación, registro y reserva de admisión o desechamiento. El cinco de agosto de dos mil veintiuno se radicó y registró el procedimiento sancionador ordinario con el número de expediente 10/2021-PSO-CG, instaurado en contra del otrora partido político Fuerza por México y del ciudadano David Huerta Jasso, por la presunta omisión de

presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

X. Diligencias de investigación preliminar. El cinco de agosto de dos mil veintiuno la *UTJCE* solicitó a la *Secretaría Ejecutiva* que remitiera copia certificada del expediente de la candidatura a la sindicatura suplente del municipio de Romita postulada por el otrora partido político Fuerza por México; así también de los oficios de requerimiento del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de dicha candidatura. En ese sentido, se remitió a la *UTJCE* el oficio SE/3088/2021, suscrito por la secretaria ejecutiva de este *Instituto*, por medio del cual se proporcionó la información solicitada.

El treinta de agosto de dos mil veintiuno la *UTJCE* ordenó requerir al ciudadano David Huerta Jasso, quien fue postulado como candidato a síndico suplente en el municipio de Romita por el otrora partido político Fuerza por México.

Toda vez que el domicilio del C. David Huerta Jasso que obraba en los archivos del *Instituto* no resultó cierto, mediante autos de fechas seis y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó requerir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita (SAPAR), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al titular del Registro Público de la Propiedad de Silao de la Victoria y de León, a efecto de que proporcionaran diverso domicilio del citado ciudadano.

XI. Pérdida de registro del partido político Fuerza por México. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG1569/2021, relativo a la pérdida de registro del Partido Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.

XII. Resolución que confirma pérdida de registro del partido político Fuerza por México. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno la *Sala Superior* emitió la resolución SUP-RAP-420/2021, por medio de la cual confirmó el dictamen INE/CG1569/2021 del

Consejo General del *INE* por el que se declaró la pérdida de registro de Fuerza por México como partido político nacional.

XIII. Ampliación del plazo de investigación. El seis de octubre de dos mil veintiuno la *UTJCE* ordenó la ampliación del plazo para llevar a cabo la investigación dentro del procedimiento sancionador que nos ocupa por un periodo de cuarenta días más, ello a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la resolución del presente asunto. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 367, tercer párrafo de la *ley electoral local* y 82 del *reglamento de quejas y denuncias*.

XIV. Diligencias de investigación preliminar. El ocho de octubre, así como uno y dos de noviembre de dos mil veintiuno la *UTJCE* ordenó requerir al ciudadano David Huerta Jasso, quien fue postulado como candidato a síndico suplente en el municipio de Romita por el otrora partido político Fuerza por México.

A través del proveído del once de enero de dos mil veintidós la *autoridad sustanciadora* solicitó diversa documentación en copia certificada a la *Secretaría Ejecutiva*, lo cual fue atendido mediante el oficio SE/035/2022.

XV. Admisión y emplazamiento. La *UTJCE* admitió el procedimiento a trámite y mediante los autos dictados el ocho y once de febrero de dos mil veintidós ordenó emplazar al ciudadano David Huerta Jasso, quien fue postulado como candidato a síndico suplente en el municipio de Romita por el otrora partido político Fuerza por México.

Asimismo, se determinó la imposibilidad jurídica de emplazar al otrora partido político Fuerza por México, toda vez que el mismo había perdido su registro como partido político, al no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.

Posteriormente, mediante auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se tuvo al ciudadano David Huerta Jasso por no contestando las imputaciones que se le formularon.

XVI. Vista y cierre de instrucción. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, una vez recabadas las constancias necesarias y al estar en posibilidades de elaborar el proyecto de resolución correspondiente la *UTJCE* determinó el cierre de instrucción y ordenó poner a la vista del ciudadano David Huerta Jasso el expediente respectivo; lo anterior, sin que hiciera manifestación alguna.

XVII. Ampliación del plazo para elaborar proyecto de resolución. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós se dictó auto mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 368, de la *Ley electoral local*, en relación con el párrafo segundo del artículo 93 del *reglamento de quejas y denuncias*, se amplió el plazo para elaborar el proyecto de resolución por diez días más.

XVIII. Remisión del proyecto de resolución a la *Comisión de Quejas y Denuncias*. Mediante el oficio UTJCE/455/2022, firmado por el otrora encargado de despacho de la *UTJCE*, el nueve de mayo de dos mil veintidós se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias* el proyecto de resolución del expediente 10/2021-PSO-CG, mediante el cual se propuso sobreseer el procedimiento sancionador ordinario por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México y declarar la inexistencia de infracción atribuida al ciudadano David Huerta Jasso.

XIX. Devolución del proyecto de resolución por la *Comisión de Quejas y Denuncias*. En la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la *Comisión de Quejas y Denuncias* aprobó por unanimidad de votos la devolución del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG, a efecto de que se realizara diligencia de inspección y se elaborara un nuevo proyecto de resolución considerando los razonamientos y argumentos formulados por dicha Comisión.

XX. Solicitud de apoyo a la Unidad de Oficialía Electoral del *Instituto*. A través del auto del veintitrés de mayo de dos mil veintidós la *autoridad sustanciadora* acordó la devolución del procedimiento y, en atención a lo expuesto en la sesión referida en el punto que antecede, se ordenó solicitar el apoyo de la Unidad de Oficialía Electoral del *Instituto*, con el propósito de que certificara si obraba o no el documento denominado formato «3 de 3 contra la violencia» en el expediente físico y digital de registro del

ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En tal sentido, el dos de junio de dos mil veintidós se recibió en la *UTJCE* el oficio OE/071/2022, signado por el titular de la Unidad de Oficialía Electoral del *Instituto*, a través del cual, en atención a lo solicitado, remitió el acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022.

XXI. Vista a la parte denunciada con la prueba documental pública recabada.

Mediante auto del tres de junio de dos mil veintidós, la *UTJCE* ordenó poner a la vista del ciudadano David Huerta Jasso el acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022 para que, dentro del plazo de cinco días hábiles realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, lo anterior sin que presentara escrito alguno.

XXII. Determinación de la necesidad realizar mayores diligencias para la debida integración del expediente. Por medio del auto del seis de junio de dos mil veintidós, la *autoridad sustanciadora* determinó la necesidad de realizar mayores diligencias para la debida integración del expediente, específicamente ante la vista dada al ciudadano David Huerta Jasso con el acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022.

Lo anterior, aunado a la posibilidad de realizar un adecuado análisis técnico-jurídico de las constancias que obraban en el expediente y salvaguardar el principio de exhaustividad, lo que implicaba la necesidad de contar con un mayor tiempo para integrarlo debidamente y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

XXIII. Elaboración del nuevo proyecto de resolución. En cumplimiento a lo ordenado por la *Comisión de Quejas y Denuncias*, la *UTJCE* elaboró un nuevo proyecto de resolución del expediente 10/2021-PSO-CG. En dicho proyecto se propuso declarar la existencia de infracción atribuida al ciudadano David Huerta Jasso, quedando intocado el sobreseimiento del procedimiento sancionador ordinario por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México.

XXIV. Remisión del nuevo proyecto de resolución a la *Comisión de Quejas y Denuncias*. Mediante el oficio UTJCE/666/2022, firmado por el otrora encargado de despacho de la *UTJCE*, el primero de julio de dos mil veintidós se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias* el nuevo proyecto de resolución citado en el punto anterior.

XXV. Aprobación del proyecto de resolución por la *Comisión de Quejas y Denuncias*. En la sesión extraordinaria del ocho de julio de dos mil veintidós, la *Comisión de Quejas y Denuncias* aprobó el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el último párrafo del artículo 368 de la *Ley electoral local*.

XXVI. Remisión del proyecto de resolución al *Consejo General*. Mediante el oficio CQyD/042/2022, firmado por la presidenta de la *Comisión de Quejas y Denuncias*, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós se remitió el proyecto referido en el punto anterior a este *Consejo General*.

XXVII. Devolución del proyecto de resolución por el *Consejo General*. En sesión extraordinaria del *Consejo General* celebrada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se determinó rechazar el proyecto y devolverlo a la *UTJCE*, a efecto de que se elaborara un nuevo proyecto en el que se declarara la inexistencia de la infracción respecto del ciudadano David Huerta Jasso tomando en cuenta los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de las personas integrantes de este *Consejo General*, quedando intocado el sobreseimiento respecto del otrora partido político Fuerza por México.

En ese sentido, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós la consejera presidenta de este *Instituto* remitió a la *UTJCE* copia certificada del acuerdo de devolución identificado con la clave CGIEEG/053/2022, ello con el propósito de que se otorgara el trámite respectivo.

XXVIII. Solicitud a la *Secretaría Ejecutiva*. A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, a través del proveído del diez de enero de dos mil veintitrés, la *autoridad sustanciadora* ordenó solicitar a la *Secretaría Ejecutiva* copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del *Consejo General* celebrada el nueve de diciembre de dos mil

veintidós, en la que se contienen los argumentos, consideraciones y razonamientos por los cuales se determinó rechazar el proyecto y devolverlo a la *UTJCE* para que elaborara uno nuevo en el que se declarara la inexistencia de la infracción respecto del ciudadano David Huerta Jasso y se sostuviera el sobreseimiento por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México.

XXIX. Aprobación y remisión del acta a la *UTJCE*. En la sesión ordinaria del veintisiete de febrero, este *Consejo General* aprobó el Acta 44, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el nueve de diciembre de dos mil veintidós.

En ese sentido, el veintiocho de marzo mediante el oficio SE/239/2023 la *Secretaría Ejecutiva* remitió a la *autoridad sustanciadora* la copia certificada del acta referida en el párrafo anterior.

XXX. Remisión del nuevo proyecto de resolución al *Consejo General*. Toda vez que mediante el acuerdo CGIEEG/053/2022, este *Consejo General* —con apoyo en lo establecido en el artículo 369, fracción IV de la *ley electoral local*— ordenó a la *UTJCE* la elaboración de un **nuevo proyecto de resolución en el que se declarara la inexistencia de la conducta con los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de las personas integrantes de dicho Consejo, quedando intocado el sobreseimiento respecto del otrora partido político Fuerza por México**; mediante el oficio UTJCE/876/2023, signado por el titular de la *Unidad Técnica Jurídica*, el tres de julio de dos mil veintitrés se remitió al *Consejo General* el nuevo proyecto de resolución del expediente 10/2021-PSO-CG en el que, en atención a lo ordenado por este órgano colegiado, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a David Huerta Jasso.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver del presente procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en los artículos 356, párrafo primero, fracción I y 369 de la *Ley electoral local*; así como 10, fracción I y 96 del *reglamento de quejas y denuncias*.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015,² emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: **COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES**, mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo expuesto en el punto anterior, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el primero de los supuestos que el citado criterio jurisprudencial señala.

Esto es, en la legislación electoral local se encuentra prevista como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos y las personas precandidatas y aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular, el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del *Instituto*, así como de cualquiera de las disposiciones establecidas en la *Ley electoral local*, pues los artículos 346, fracción I y 347, fracción VIII de dicha ley señalan lo siguiente:

«Artículo 346. *Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

- I. *El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Estatal;*

² Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

Artículo 347. *Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:*

VIII. *El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley»*

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el otrora partido político Fuerza por México hubiese tenido registro nacional, puesto que nuestra legislación electoral local prevé a los partidos políticos nacionales y locales como sujetos de derechos y obligaciones, sin distinción alguna. En ese tenor, es menester transcribir lo previsto en los siguientes preceptos de la *Ley electoral local*, en los que se corrobora la competencia de este órgano para resolver el asunto:

«Artículo 30. Los partidos políticos nacionales gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales y se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en los procesos electorales locales; los estatales gozarán de esa personalidad desde el momento en que obtengan su registro ante el citado Instituto Estatal.

Artículo 44. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Sección será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General.»

2. Procedencia de la vía. Toda vez que los hechos materia de este expediente no corresponden a las conductas previstas por el artículo 370 de la *Ley electoral local*, que se tramitan por la vía especial, esto es, no corresponden a conductas que violen lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la *Constitución* (fracción I); o, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral (fracción II); o constituyan actos anticipados de precampaña y campaña (fracción III); constituyan cualquier otra infracción a la *Ley electoral local* que incida directa o indirectamente en el proceso electoral (fracción IV); o bien, estén relacionados con violencia política electoral contra las mujeres en razón de género se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente asunto, como fue establecido mediante auto del treinta de julio de dos mil veintiuno.

3. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 466, numeral 3 de la *LGIFE*; 365, primer

párrafo de la *Ley electoral local* y 65 del *reglamento de quejas y denuncias*, establecen que las causales de improcedencia que produzcan el sobreseimiento de la queja o denuncia deberán ser examinadas de oficio, lo procedente es entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas.

3.1. Pérdida de registro del otrora partido político Fuerza por México.

En cuanto al otrora partido político Fuerza por México, se advierte la actualización de los supuestos previstos en los artículos 466, numeral 2, inciso b) de la *LGIPE*; 365, fracción II de la *Ley electoral local* y 67 fracción, II del *reglamento de quejas y denuncias*; preceptos que establecen lo siguiente:

- *LGIPE*:

«Artículo 466.

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y»

- *Ley electoral local*:

«Artículo 365. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y»

- *Reglamento de quejas y denuncias*:

«Artículo 67. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

II. La parte denunciada sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro; y;»

De las disposiciones jurídicas citadas, se advierte que procede decretar el sobreseimiento de un procedimiento sancionador cuando un partido político haya perdido su registro.

En el presente asunto debe señalarse que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno el Consejo General del *INE*, aprobó el acuerdo INE/CG1569/2021, relativo a la pérdida de registro del partido político Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno³, estableciéndose en el punto resolutivo segundo de dicho acuerdo lo siguiente:

«**SEGUNDO.-** Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, de “Fuerza por México”, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM y 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP.»

En ese mismo tenor, mediante el acuerdo CGIEEG/315/2021 emitido el diez de septiembre de dos mil veintiuno por este *Consejo General*, se declaró que el otrora partido político Fuerza por México no obtuvo el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato.

Lo anterior, sin que pase desapercibido que el otrora partido político Fuerza por México ejerció su derecho, consistente en la presentación de la solicitud de registro como partido político local ante este Instituto de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de los *Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General*. Al respecto, mediante el acuerdo CGIEEG/348/2021 de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, este *Consejo General* determinó improcedente el registro del partido político Fuerza por México como partido político local al no obtener el porcentaje de votación mínimo requerido.

Así, debe tenerse en cuenta que el artículo 41, Base I, último párrafo de la *Constitución*, establece que el partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

³ Consulta disponible en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125230/CG2ex202109-30-dp-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Por su parte, el artículo 94, inciso b) de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la *Ley de Partidos* determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, el partido político Fuerza por México ha dejado de existir por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en algún procedimiento administrativo sancionador.

No pasa desapercibido para esta autoridad que el otrora partido político Fuerza por México interpuso recurso de apelación ante la *Sala Superior* identificado con el número de expediente SUP-RAP-420/2021, ello a fin de impugnar el acuerdo INE/CG1569/2021, emitido por el Consejo General del *INE*, no obstante, el citado órgano jurisdiccional confirmó la referida determinación.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*, en su artículo 169, fracción I, inciso c) la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro del partido político Fuerza por México como partido político nacional ha quedado firme.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México, en términos de lo establecido en los artículos 41, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIFE*; 94, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2 de la *Ley de Partidos*; 365, fracción II de la *Ley electoral local* y 67 fracción, II del *Reglamento de quejas y denuncias*.

En torno a lo anterior, es preciso tener presente que el sobreseimiento o, en su caso, del desechamiento por improcedencia de una queja, es una forma de conclusión anormal del procedimiento administrativo sancionador, que se actualiza cuando existe un obstáculo insuperable para el establecimiento de la relación jurídica procesal (improcedencia), en el primer caso; o cuando, establecida ésta, se vuelve ocioso el dictado de una resolución que decida sobre la controversia planteada (sobreseimiento), en el segundo.

Lo anterior, atiende la necesidad de evitar que los órganos del Estado, encargados de administración de justicia, distraigan recursos humanos, financieros y materiales en la emisión de resoluciones que no tendrán un fin práctico, ya sea porque la materia de disputa ha desaparecido o porque el fallo respectivo sea de imposible ejecución.

En el caso que nos ocupa, como se mencionó anteriormente, el partido político denunciado ha dejado de existir por haber perdido su registro, en consecuencia, se extingue la facultad sancionadora y la prosecución del procedimiento sancionador deja de tener sentido, en virtud de lo cual, lo atinente de acuerdo con la propia norma jurídica, es sobreseer el asunto, dado que el mismo ha quedado sin materia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 34/2002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- *El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que*

*se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto **ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta**, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.*

**Lo resaltado no es de origen.*

En otras palabras, lo procedente es dar por concluido el presente asunto por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México dado que este *Consejo General* se encuentra imposibilitado para continuar con el procedimiento sancionador ordinario, en razón de que se carece de un respaldo legal para imputar la existencia de una posible infracción al denunciado, así como para imponer una sanción.

Por último, no se omite señalar que el Consejo General del *INE* ha sustentado el mismo criterio al emitir diversas resoluciones de procedimientos ordinarios sancionadores tramitados en contra de extintos partidos políticos; entre otras, las resoluciones INE/CG182/2016, INE/CG1447/2018, INE/CG175/2019, INE/CG177/2019,

INE/CG179/2019, INE/CG181/2019, INE/CG184/2019, INE/CG185/2019, INE/CG186/2019, INE/CG187/2019 e INE/CG188/2019.

En razón de todo lo expuesto, este *Consejo General*, de una interpretación sistemática y funcional, determina que, respecto del otrora partido político Fuerza por México se actualiza la causal prevista en los artículos 41, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*; 94, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2 de la *Ley de Partidos*; 365, fracción II de la *Ley electoral local* y 67 fracción, II del *Reglamento de quejas y denuncias*; en consecuencia, el presente procedimiento sancionador ordinario iniciado en contra del otrora partido político Fuerza por México debe **sobreseerse**.

En virtud de lo anterior, al haberse actualizado la causa de sobreseimiento expuesta en este considerando, no es necesario realizar un análisis respecto a las diversas causales previstas en los artículos 365 de la *Ley electoral local* y 67 del *Reglamento de quejas y denuncias*. Lo anterior, con base en la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por igualdad de razón:

«SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución⁴.»

4. Plazo para que opere la caducidad. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 del *reglamento de quejas y denuncias*, así como en la jurisprudencia 9/2018 de rubro **CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR**, el plazo para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento sancionador ordinario es de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tiene conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de una infracción electoral.

⁴ Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Tesis: 2a./J. 54/98, Página: 414.

En el caso, el plazo transcurrido entre el inicio del procedimiento ordinario sancionador y la emisión de la presente resolución es menor a dos años, tomando en consideración que el inicio del presente procedimiento fue el cinco de agosto de dos mil veintiuno, por lo que la figura de la caducidad de la potestad sancionadora no se actualiza.

5. Estudio de fondo. De la vista dada a la *UTJCE* se advierte que los hechos materia del presente procedimiento consisten en que presuntamente se omitió presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro del ciudadano David Huerta Jasso, persona postulada por el otrora partido político Fuerza por México como candidato a sindico suplente del municipio de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Se precisa que, para llevar a cabo el estudio de fondo en el presente asunto, a continuación, se abordará el marco jurídico aplicable, el planteamiento del caso en particular, así como el análisis de los razonamientos que conllevan a este *Consejo General* a declarar la inexistencia de la infracción atribuida al ciudadano David Huerta Jasso.

5.1 Marco jurídico

Resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general, relativas al marco normativo que resulta aplicable al presente sumario, siendo los artículos 445, inciso f) de la *LGIPE*; 347, fracción VIII de la *Ley electoral local*; 1 y 32 de los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*⁵; 1, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de los *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*, emitidos por este *Instituto*⁶ y 14, fracción IX de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021*, emitidos por este *Instituto*⁷; disposiciones que al efecto señalan:

⁵ Aprobados por el Consejo General del *INE* mediante el acuerdo INE/CG517/2020.

⁶ Aprobados por el Consejo General de este *Instituto* mediante el acuerdo CGIEEG/035/2021.

⁷ Aprobados por el Consejo General de este *Instituto* mediante el acuerdo CGIEEG/077/2021.

➤ **LGIPE**

«Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

...

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.»

➤ **Ley electoral local**

«Artículo 347. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

...

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.»

➤ **Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género**

«Artículo 1. Las presentes disposiciones son de interés público y observancia general para los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, para los partidos políticos locales, sus órganos intrapartidarios, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos postulados por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de éstos.

Artículo 32. En concordancia y corresponsabilidad con la obligación señalada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, y como garantía de protección, las y los sujetos obligados por los presentes Lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:

- I.** No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
- II.** No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- III.** No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.»

➤ **Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género**

«Ámbito de aplicación

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia general para los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato, sus órganos intrapartidarios, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos que se postulen por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de estos; así como para aspirantes a candidaturas independientes, candidatas y candidatos independientes, y aquellas personas que participen en los procesos electorales a través de candidaturas independientes.

**Suscripción de formatos por las
personas candidatas de partidos políticos**

Artículo 45. Los partidos políticos deberán solicitar a las personas que postulen en sus candidaturas, firmar un formato, en que de buena fe y bajo protesta de decir verdad, se manifieste:

- I. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;
- II. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidación corporal; y
- III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

El formato previsto en el párrafo primero de este artículo se contendrá en los Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021.

**Suscripción de formatos por personas
que soliciten registro de candidaturas independientes**

Artículo 46. Las personas que soliciten el registro de sus candidaturas independientes deberán acompañar a la solicitud, un formato en que, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, se manifieste lo indicado en las fracciones I a III del artículo 45 de estos lineamientos.

Obligación de los partidos políticos de adjuntar los formatos

Artículo 47. Los partidos políticos que soliciten registro de candidaturas deberán acompañar a la solicitud, los formatos firmados por las personas que postulen en que se manifieste lo indicado en las fracciones I a III del artículo 45 de estos lineamientos.

Requerimiento

Artículo 48. En caso de que los partidos políticos y las personas que soliciten el registro de sus candidaturas independientes no presenten el formato indicado en el artículo 45 de

estos lineamientos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto les requerirá para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se les practique, subsanen la omisión y presenten los formatos correspondientes.

**Informe de la Presidencia del Consejo General
al concluir el procedimiento de registro de candidaturas**

Artículo 49. En la sesión de registro de candidaturas que celebre el Consejo General, la Presidencia de este rendirá un informe sobre el cumplimiento a lo establecido en los artículos 45, 46, 47 y 48 de estos lineamientos, desagregando la información por partido político y candidaturas independientes, por cargos públicos de elección popular, por sexo, por distrito y municipio.

**Vista a la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral**

Artículo 50. El Consejo General dará vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos a que se refieren los artículos 45, 46 y 47 de estos lineamientos, una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondan.»

➤ **Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021**

«Anexos de las solicitudes

Artículo 14. Las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos y coaliciones deberán acompañarse de la documentación siguiente:

...

IX. Escrito firmado por las personas postuladas como candidatas en que el que (SIC) manifiesten, bajo protesta de decir verdad:

a) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;

b) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidación corporal; y

c) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

El formato del escrito en que se contengan las manifestaciones será proporcionado por el Instituto, previamente al inicio de los plazos establecidos para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género (**anexo 3**).»

5.2 Planteamiento del caso

En la sesión ordinaria del treinta de junio de dos mil veintiuno, el otrora consejero presidente de este *Instituto* presentó el *Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno*. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

De dicho informe, se desprendió que, entre otros, el otrora partido político Fuerza por México no presentó el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Visto lo anterior, este *Consejo General*, mediante el acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, ordenó dar vista a la *UTJCE* para que sustanciara los procedimientos sancionadores respectivos.

Posteriormente, mediante el oficio SE/2996/2021 la *Secretaría Ejecutiva* materializó la vista a la *UTJCE* y remitió copia certificada del *Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno*, así como del acuerdo CGIEEG/309/2021 que, en lo conducente, señala:

**«Omisión de la presentación del formato
«3 de 3 contra la violencia» y vista a la UTJCE**

6. El artículo 50 de los *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*, establece el Consejo General dará vista a la

Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos denominados «3 de 3 contra la violencia», referidos en los artículos 45, 46 y 47 de dichos lineamientos, una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondan.

En ese sentido, y como se desprende del Informe final correspondiente a la presentación del formato “3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el 6 de junio de 2021, presentado por el consejero presidente de este consejo General en la sesión ordinaria celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno, cuatro partidos políticos no presentaron dicho formato en cinco candidaturas, mismas que son a saber:

PARTIDO POLÍTICO	MUNICIPIO	CARGO
<i>Movimiento Ciudadano</i>	<i>Celaya</i>	<i>Regiduría suplente 5</i>
	<i>Dolores Hidalgo C.I.N.</i>	<i>Sindicatura propietaria</i>
<i>Morena</i>	<i>Villagrán</i>	<i>Regiduría propietaria 4</i>
<i>Partido Encuentro Solidario</i>	<i>Irapuato</i>	<i>Regiduría propietaria 4</i>
<i>Fuerza por México</i>	<i>Romita</i>	<i>Sindicatura suplente</i>

En consecuencia, resulta procedente dar vista de dicha circunstancia a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral a fin de que, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 103, fracción IV, 356, fracción III, y 361 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como 10, fracción III, y 69 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sustancie los procedimientos sancionadores ordinarios respectivos, al haberse presuntamente incurrido en incumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por este Consejo General mediante el acuerdo CGIEEG/035/2021.»

Así, del considerando anteriormente transcrito, se desprende lo siguiente:

- De conformidad con lo establecido en el acuerdo CGIEEG/035/2021, a través del cual se emitieron los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*; los partidos políticos y personas candidatas deben acompañar a sus solicitudes de registro los formatos denominados «3 de 3 contra la violencia».

- En la sesión ordinaria siguiente a la jornada electoral que celebre el *Consejo General*, la presidencia de este debe informar sobre el cumplimiento de entrega de los formatos «3 de 3 contra la violencia».
- La *UTJCE* debe sustanciar los procedimientos sancionadores ordinarios, respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos denominados «3 de 3 contra la violencia».
- El otrora partido político Fuerza por México presuntamente omitió presentar el formato «3 de 3 contra la violencia», respecto de la persona postulada en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
- La *UTJCE* debe tramitar el procedimiento ordinario sancionador, respecto de la omisión citada en el punto anterior.

Con base en lo anterior, la *UTJCE* sustanció el procedimiento ordinario sancionador 10/2021-PSO-CG, respecto de la presunta omisión del otrora partido político Fuerza por México de presentar el formato «3 de 3 contra la violencia», en la postulación de la candidatura a la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En dicho procedimiento, mediante el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós la *UTJCE* tuvo como parte denunciada a David Huerta Jasso, persona postulada en el referido cargo y se determinó la imposibilidad jurídica de emplazar al otrora partido político Fuerza por México.

Al respecto, es importante precisar que la *Ley electoral local* contiene un capítulo en que se establecen los sujetos de responsabilidad, conductas reprochables y sanciones aplicables a cada caso.

Dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la *Ley electoral local*, se encuentran los partidos políticos y los aspirantes, precandidatos, candidatos y

candidatos independientes a cargos de elección popular, ello de conformidad con lo establecido su artículo 345, fracciones I y II.

Por cuanto hace a las conductas sancionables, los numerales 346, fracción I y 347, fracción VIII de la ley citada, prevén como infracción el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del *Instituto* por parte de los partidos políticos y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular.

Ahora bien, el artículo 32 de los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género* establece que las y los aspirantes a una candidatura deberán firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:

- I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
- II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

En ese mismo sentido, los artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*, así como 14, fracción IX de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021*, ambos emitidos por este *Instituto*; establecen que los partidos políticos y personas que soliciten registro de candidaturas deben acompañar a la solicitud, el formato denominado «3 de 3 contra la violencia».

Es atribución de este *Consejo General* vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley y a los lineamientos que se emitan para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, de conformidad con lo establecido en el artículo 92, fracción XLII de la *Ley electoral local*; además de que, conforme a la fracción II del mismo precepto legal, este órgano superior de dirección, a través del ejercicio de la facultad reglamentaria, podrá emitir disposiciones jurídicas de observancia general.

En ese sentido, los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato, sus órganos intrapartidarios, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos que se postulen por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de estos; así como los aspirantes a candidaturas independientes, candidatas y candidatos independientes, y aquellas personas que participen en los procesos electorales a través de candidaturas independientes; están sujetas a dar cumplimiento a las obligaciones previstas en los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*, así como en los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021*, ello al tratarse de ordenamientos emitidos por este *Instituto*.

5.2.1 Respuesta al emplazamiento, alegatos y vista con prueba documental pública recabada por la *UTJCE*.

Mediante auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la *autoridad sustanciadora* tuvo al denunciado David Huerta Jasso, por no contestando las imputaciones que se le formularon y, de conformidad con lo establecido en los artículos 366 de la *Ley electoral local* y 86 del *reglamento de quejas y denuncias*, se le tuvo por precluido su derecho a ofrecer pruebas, ello sin que se generara presunción sobre la veracidad de los hechos investigados.

En lo tocante a la vista dada por la *UTJCE* para que realizara las manifestaciones y alegaciones que a su derecho convinieran, mediante el auto de fecha veinticinco de

marzo de dos mil veintidós se tuvo al denunciado David Huerta Jasso por no realizando manifestación alguna.

Asimismo, en cuanto a la vista dada respecto del acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022, la cual tuvo como finalidad constatar si obraba o no el *formato «3 de 3 contra la violencia»* en el expediente físico y digital del denunciado David Huerta Jasso; mediante el auto del trece de junio de dos mil veintidós se le tuvo a dicho ciudadano por no realizando manifestación alguna.

5.2.2 Pruebas

Por lo que hace a las pruebas allegadas al expediente con motivo de la vista dada y a las recabadas por la *autoridad sustanciadora*, se tienen las siguientes **documentales públicas**:

Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
La <i>Secretaría Ejecutiva</i> remitió las probanzas a la <i>UTJCE</i> en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado por este <i>Consejo General</i> en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno.	<p>1. Copia certificada del oficio SE/2996/2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, signado por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este <i>Instituto</i>, al cual adjuntó:</p> <p>1.1 Copia certificada del oficio P/280/2021, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, signado por el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, otrora consejero presidente de este <i>Instituto</i>, por medio del cual rinde informe al <i>Consejo General</i>, respecto de la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia»</p>	<p>De la copia certificada del informe rendido por el otrora consejero presidente de este <i>Instituto</i>, se advierte que no fue presentado el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.</p> <p>De la copia certificada del acuerdo CGIEEG/309/2021 se advierte la vista dada por este Consejo General a la UTJCE,</p>	<p>Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIFE</i>; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i>; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, a las cuales no puede otorgárseles eficacia probatoria toda vez</p>

	<p>por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno.</p> <p>1.2 Copia certificada del acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado por este <i>Consejo General</i> en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno.</p>	<p>respecto de la omisión de presentar el citado formato «3 de 3 contra la violencia». Lo anterior, con el propósito de que se sustanciara el procedimiento sancionador ordinario respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de los <i>Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género.</i></p>	<p>que por sí solas resultan insuficientes para acreditar los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las pueda perfeccionar o corroborar.</p> <p>Lo anterior, pues las documentales públicas son sujetas a un régimen de valoración como elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria, y viceversa.</p> <p>Sirve como criterio orientador lo establecido en la tesis VI.2o.C.289 K, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACION CON SU PRESENTANTE»⁸.</p>
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración

⁸ Visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2689.

Mediante proveído del cinco de agosto de dos mil veintiuno la <i>UTJCE</i> ordenó solicitar a la <i>Secretaría Ejecutiva</i> que remitiera copia certificada del expediente de registro de la persona postulada por el partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita; así también del eventual oficio de requerimiento del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de dicha candidatura.	<p>2. Original del oficio SE/3088/2021 de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, signado por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este <i>Instituto</i>, al cual adjunta:</p> <p>2.1 Copia certificada del expediente de la persona postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente del municipio de Romita en el proceso electoral local 2020-2021.</p> <p>2.2 Copia certificada del oficio identificado con la clave REQ. RCIEEG/0201/2021, de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.</p>	<p>De la revisión de la copia certificada del expediente de David Huerta Jasso, persona postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita en el proceso electoral local 2020-2021 se advierte la inexistencia del formato denominado «3 de 3 contra la violencia».</p> <p>De la copia certificada del oficio identificado con la clave REQ. RCIEEG/0201/2021, se advierte que se requirió la presentación del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» respecto de la totalidad de los integrantes de la planilla de Romita, postulada por el otrora partido político Fuerza por México.</p>	<p>Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIFE</i>; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i>; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p>
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
Mediante los autos dictados el seis y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó requerir a diversas empresas y autoridades, a efecto de que proporcionaran el domicilio del C. David Huerta Jasso.	<p>3. Original del oficio SSB/DP-08.932/2021, signado por el licenciado Miguel Ángel Martínez Álvarez, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial del Bajío de la Comisión Federal de Electricidad.</p> <p>4. Original del oficio SAPAR/175/2021, signado por el ingeniero Guillermo Bedía Briseño, Director</p>	De dichas constancias se advierten datos relacionados con el domicilio del C. David Huerta Jasso, información brindada por diversas empresas y autoridades.	Las probanzas descritas tienen el carácter de documentales públicas conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIFE</i> ; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor

	<p>General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Guanajuato.</p> <p>5. Copia de la boleta de ingreso con número de solicitud 3896045, emitida por el Registrador Público de la Propiedad en León, Guanajuato con fecha de emisión del primero de octubre de dos mil veintiuno.</p> <p>6. Copia de la boleta de ingreso con número de solicitud 322093, emitida por el Registrador Público de la Propiedad en Silao, Guanajuato con fecha de emisión del primero de octubre de dos mil veintiuno.</p> <p>7. Original del oficio 2021-9390-16821, emitido por el licenciado René Alejandro Velázquez Martínez, Jefe del Departamento Jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.</p> <p>8. Original del oficio 110109679100/2279/2021, signado por Gloria Haydé Vargas Mares, titular de la Subdelegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>9. Original del oficio RPPYC/3052/2021, signado por la licenciada Carmen Yoana Uribe Zúñiga, Registradora pública suplente de la propiedad en León, Guanajuato de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno.</p>		<p>probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p>
--	---	--	---

	10. Copia de la solicitud 3896045, emitida por la Registradora Pública Rosa María Peredo Fonseca con fecha de emisión del cuatro de octubre de dos mil veintiuno.		
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
<p>Mediante el auto dictado por la <i>UTJCE</i> el once de enero de dos mil veintidós se ordenó solicitar a la <i>Secretaría Ejecutiva</i> que remitiera copia certificada de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo CGIEEG/108/2021, aprobado en la sesión especial efectuada el cuatro de abril de dos mil veintiuno por el Consejo General de este <i>Instituto</i>. - Acuerdo CGIEEG/237/2021, aprobado en la sesión extraordinaria efectuada el siete de mayo de dos mil veintiuno por el Consejo General de este <i>Instituto</i>. - Oficio SE/1746/2021 emitido por la <i>Secretaría Ejecutiva</i>. - Solicitud de registro de la planilla de candidaturas a integrar el 	<p>11. Original del oficio SE/035/2022 signado por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este <i>Instituto</i>, por medio del cual, en atención al oficio UTJCE/0023/2021 remite:</p> <p>11.1 Copia certificada del acuerdo CGIEEG/108/2021, aprobado en la sesión especial efectuada el cuatro de abril de dos mil veintiuno por el Consejo General del <i>Instituto Electoral</i> del Estado de Guanajuato.</p> <p>11.2 Copia certificada del acuerdo CGIEEG/237/2021, aprobado en la sesión extraordinaria efectuada el siete de mayo de dos mil veintiuno por el Consejo General del <i>Instituto Electoral</i> del Estado de Guanajuato.</p> <p>11.3 Copia certificada del oficio SE/1746/2021</p>	<p>Del original del oficio SE/035/2022 signado por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, <i>Secretaría Ejecutiva</i> de este <i>Instituto</i>, se advirtió que no hubo sustitución alguna de la persona postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita.</p> <p>De la copia certificada del acuerdo CGIEEG/108/2021, se advirtió que se registró, entre otras, la planilla de candidatas y candidatos a integrar el ayuntamiento de Romita, postulada por el otrora partido político Fuerza por México para contender en la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno.</p> <p>Respecto a la copia certificada del acuerdo CGIEEG/237/2021, aprobado en la sesión extraordinaria, se advierte que a través de la resolución emitida en el expediente TEEG-REV-19-2021, el <i>Tribunal electoral local</i></p>	<p>La probanza descrita tiene el carácter de documental pública conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIFE</i>; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i>; cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p>

<p>ayuntamiento de Romita, por parte del partido político Fuerza por México en el proceso electoral local 2020-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuse de recepción de la documentación presentada por el partido político Fuerza por México para registrar la planilla para integrar el ayuntamiento de Romita, en el proceso electoral local 2020-2021. - De ser el caso, remitiera las solicitudes de sustitución de la persona postulada en la sindicatura suplente de la planilla para integrar el ayuntamiento de Romita, por el partido Fuerza por México, en el proceso electoral local 2020-2021. 	<p>emitido por la <i>Secretaría Ejecutiva</i>.</p> <p>11.4Copia certificada de la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a integrar el ayuntamiento de Romita, Guanajuato por parte del partido político Fuerza por México en el proceso electoral local 2020-2021.</p> <p>11.5Copia certificada del acuse de recepción de la documentación presentada por el partido político Fuerza por México para registrar la planilla para integrar el ayuntamiento de Romita, Guanajuato, en el proceso electoral local 2020-2021.</p>	<p>determinó modificar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEEG/108/2021, en que se declaró procedente el registro de la planilla de candidaturas postulada por el otrora partido político Fuerza por México, para contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Romita.</p> <p>En la citada resolución se ordenó requerir al otrora partido político Fuerza por México, para que subsanara las deficiencias advertidas y postulara candidatas y candidatos para integrar de manera completa la planilla, presentara toda la documentación atinente al registro de tales personas en términos de ley, así como para que hiciera los ajustes necesarios y se respetara el principio de paridad de género, lo cual se advierte que fue realizado mediante el oficio SE/1746/2021.</p> <p>No obstante, dicho requerimiento no fue cumplido, por lo que posteriormente este <i>Consejo General</i> emitió el acuerdo CGIEEG/237/20219, mediante el cual se registró la planilla de candidatas y candidatos a integrar el ayuntamiento de Romita, postulada por</p>	
---	---	--	--

⁹ Obra a foja 142 a 152 del expediente.

		<p>el otrora partido político Fuerza por México, ello en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEEG-REV-19/2021.</p> <p>De la copia certificada de la solicitud de registro se advierte que el C. David Huerta Jasso fue postulado por el otrora partido político Fuerza por México como candidato a síndico suplente en el municipio de Romita.</p> <p>De la copia certificada del acuse de recepción de la documentación presentada por el otrora partido político Fuerza por México para registrar la planilla a integrar el ayuntamiento de Romita en el proceso electoral local 2020-2021, se advierte que únicamente se presentó un documento consistente en la misma solicitud de registro, ello sin que se adjuntara algún otro documento.</p>	
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
A través del auto dictado el veintitrés de mayo por la <i>UTJCE</i> , se ordenó allegar al expediente copia certificada del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la <i>Comisión de Quejas y Denuncias</i> el dieciséis de mayo, sesión en la que se ordenó la devolución del procedimiento sancionador ordinario	12. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo, celebrada por la Comisión de Quejas y Denuncias, por medio de la cual se ordena la devolución del procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG a la <i>UTJCE</i> .	De la copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo, celebrada por la <i>Comisión de Quejas y Denuncias</i> , se advierte la devolución del expediente del procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG a la <i>UTJCE</i> con el propósito de que, con el apoyo de la Unidad de Oficialía	Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGIPE</i> ; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de</i>

10/2021-PSO-CG a la UTJCE.		Electoral de este <i>Instituto</i> se certificara si obraba o no el documento denominado formato «3 de 3 contra la violencia» en el expediente físico y digital de registro del ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México como candidato a síndico suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.	<i>quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio es pleno , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
Mediante el proveído dictado el veintitrés de mayo, la <i>UTJCE</i> ordenó solicitar apoyo al licenciado Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i> , para que en ejercicio de la función de oficialía electoral certificara si obraba o no el documento denominado formato 3 de 3 contra la violencia en el expediente físico y digital de registro del ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.	13. Original del oficio OE/071/2022, suscrito por Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de Oficialía Electoral de ese <i>Instituto</i> , al cual adjunta: 13.1 Copia certificada del acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022.	De la copia certificada del acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029-2022 se advierte la inexistencia del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» en el expediente físico y digital de registro del ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México como candidato a síndico suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.	Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la <i>LGPE</i> ; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la <i>Ley electoral local</i> y 91, segundo párrafo del <i>reglamento de quejas y denuncias</i> ; cuyo valor probatorio es pleno , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, a las cuales no puede otorgársele eficacia probatoria toda vez que por sí solas resultan insuficientes para acreditar los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de

			<p>prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las pueda perfeccionar o corroborar.</p> <p>Lo anterior, pues las documentales públicas son sujetas a un régimen de valoración como elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria, y viceversa.</p> <p>Sirve como criterio orientador lo establecido en la tesis VI.2o.C.289 K, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:</p> <p>DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACION CON SU REPRESENTANTE.</p>
--	--	--	---

5.3 Decisión.

En el caso que nos ocupa **no se acredita la infracción atribuida al ciudadano David Huerta Jasso**, consistente en la omisión de presentar del formato denominado «3 de 3 *contra la violencia*» para el registro de su candidatura postulada en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por las razones que se exponen a continuación.

5.3.1 La vista sobre los hechos se realizó en un momento distinto al previsto legalmente.

Primeramente, se refiere que conforme a lo establecido en los artículos 17 de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y 183 de la *Ley electoral local*, corresponde a los partidos políticos, así como a las ciudadanas y ciudadanos que lo hagan de manera independiente, el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

En ese sentido, la autoridad competente para resolver sobre dichos registros son los consejos municipales y distritales y, de manera supletoria, este *Consejo General* conforme a lo indicado en el artículo 92, fracciones XXIV y XXV de la *Ley electoral local*.

En el caso que nos ocupa, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el otrora partido político Fuerza por México presentó ante la *Secretaría Ejecutiva* la solicitud de registro de candidatas y candidatos a integrar el ayuntamiento de Romita para contender en la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno. Por lo cual, este *Consejo General* fue la autoridad competente —de manera supletoria— para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 190 de la *Ley electoral local*, así como 13 y 14 de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*.

Una vez realizados los requerimientos correspondientes, mediante los acuerdos CGIEEG/108/2021 y CGIEEG/237/2021 este *Consejo General* analizó la totalidad de los requisitos antes mencionados y otorgó el registro al ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En los acuerdos de registro antes mencionados, se hizo constar el cumplimiento de diversos requisitos, entre los que se encontraba el relativo a presentar los formatos «3 de 3 contra la violencia» previsto en los artículos 14 de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021* y 45 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

En cambio, en el *Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno*¹⁰ por el otrora presidente del *Consejo General*, se reportó que, entre otros, el otrora partido político Fuerza por México no presentó el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para la postulación de la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Aun así, en el caso en que los partidos políticos y personas no acompañen los formatos «3 de 3 contra la violencia» a sus solicitudes de registro de candidaturas, este *Consejo General* debe dar vista¹¹ a la *UTJCE* para que sustancie los procedimientos ordinarios sancionadores respectivos, tal como se establece en el artículo 50 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género* que, a la letra, indica lo siguiente:

**«Vista a la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral**

Artículo 50. *El Consejo General dará vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos a que se refieren los artículos 45, 46 y 47 de estos lineamientos, una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondan.»*

En el caso que nos ocupa, **mediante el acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno; este Consejo General ordenó dar vista a la UTJCE**, respecto a la omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de las candidaturas postuladas por partidos políticos en el proceso electoral local ordinario 2020- 2021, entre las que se

¹⁰ De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

¹¹ Véase la jurisprudencia 17/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN.**

encontraba la del ciudadano David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México, en la sindicatura suplente de Romita.

Ahora bien, respecto a la **vista que dio este Consejo General a la UTJCE** por la omisión de acompañar a las solicitudes de registro de candidaturas los formatos «3 de 3 contra la violencia», debe tomarse en cuenta que **existen dos momentos específicos para hacerlo**, a saber:

1. **Una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondan**, de conformidad con lo establecido en artículo 50 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*, y
2. **Una vez realizadas las sustituciones correspondientes**, tomando en consideración que, conforme a lo establecido en el artículo 194 fracciones I y II de la *Ley electoral local*, las candidaturas pueden sustituirse libremente siempre y cuando se hagan dentro del plazo establecido para su registro y, una vez vencido este plazo, dichas sustituciones pueden realizarse exclusivamente por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia¹²:

En el presente caso, el informe de la presidencia del *Consejo General* sobre el cumplimiento de la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 fue rendido en la sesión ordinaria del *Consejo General* del treinta de junio de dos mil veintiuno, esto es en la sesión ordinaria siguiente a la jornada electoral citada, tal como lo establece el artículo 55 de los *Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género*.

¹² **Artículo 194.** Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General, respetando las reglas de paridad y observando las siguientes disposiciones:

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. No habrá modificación a las boletas electorales en caso de cancelación de registro o sustitución de uno o más candidatos, si estas ya estuvieran impresas, en los términos de la Ley General.

No obstante, el acuerdo CGIEEG/309/2021, mediante el cual este *Consejo General* ordenó dar vista a la *UTJCE* respecto a la omisión de la presentación del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de las candidaturas postuladas por los partidos políticos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 fue emitido el veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Por ende, se tiene que la **vista no fue realizada en alguno de los dos momentos posibles**, esto es, al momento en que concluyó el plazo de registro de las candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondieran o bien, una vez realizadas las sustituciones correspondientes.

En el caso concreto, considerando que el ciudadano David Huerta Jasso no fue sustituido dentro del plazo establecido para su registro o bien, por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia; **la vista debió realizarse una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y, en su caso, una vez realizadas las prevenciones correspondientes**, esto es una vez aprobados los acuerdos CGIEEG/108/2021 y CGIEEG/237/2021 mediante los cuales se le otorgó el registró.

Por lo tanto, tomando en cuenta que el acuerdo CGIEEG/309/2021 mediante el cual se ordenó dar vista a la *UTJCE* fue emitido en momento distinto al previsto legalmente, no pueden derivarse obligaciones para las *partes denunciadas* cuya certeza y seguridad jurídica debe protegerse.

Al respecto, es preciso mencionar que el principio de seguridad jurídica debe entenderse como una garantía constitucional contenida en los artículos 14 y 16 de la *Constitución*, que parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que las autoridades deben de actuar y que la aplicación del orden jurídico será eficaz.

En ese sentido, las autoridades deben acatar puntualmente lo mandado en las disposiciones legales, mismas que, al mismo tiempo, generan certidumbre a las personas destinatarias de la norma, en particular, sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, lo cual evita que las autoridades actúen de manera arbitraria y se respeten

los principios rectores de la función electoral. Sirve a lo anterior, de manera orientadora la jurisprudencia P./J. 144/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que **en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo**; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de **certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas**. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.¹³

*El resaltado no es de origen.

En suma, si el acuerdo CGIEEG/309/2021 mediante el cual se dio vista a la *UTJCE* para que sustanciara los procedimientos sancionadores correspondientes por la omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» fue emitido en un momento distinto al previsto legalmente, debe considerarse como ineficaz y carente de validez, por lo que debe impedirse que produzca los efectos jurídicos que pretende.

¹³ Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

5.3.2 Los documentos con los que se dio vista y el acta de oficialía electoral ACTA-OE-IEEG-SE-029/2022 carecen de eficacia probatoria.

Del informe final rendido por el otrora consejero presidente de este Instituto, respecto de la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno **se desprendió que, entre otros, el otrora partido político Fuerza por México no presentó el formato denominado «3 de 3 contra la violencia»** para el registro de la candidatura postulada en la sindicatura suplente de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En ese sentido, este *Consejo General*, mediante el acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, **ordenó dar vista a la UTJCE** para que sustanciara el procedimiento sancionador respectivo.

Así, mediante el oficio SE/2996/2021 la *Secretaría Ejecutiva* remitió a la *UTJCE* copia certificada del Informe final correspondiente a la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno; así como del acuerdo CGIEEG/309/2021, a efecto de que sustanciara el procedimiento sancionador ordinario respectivo.

En el caso, las pruebas documentales públicas que dieron origen al presente procedimiento sancionador ordinario **carecen de eficacia probatoria y resultan insuficientes** para acreditar los hechos que contienen, esto es la omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada en la sindicatura suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, ya que **es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas que las pueda perfeccionar o corroborar.**

Al respecto, se cita de manera orientadora la tesis aislada III.2o.C.47 K (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **PRUEBAS. SU VALOR SE VINCULA CON EL MEDIO DE CONVICCIÓN EN SÍ MISMO EN CUANTO A SU CAPACIDAD DE PROBAR, PERO ELLO NO DETERMINA LA EFICACIA DEMOSTRATIVA PARA ACREDITAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE**¹⁴, la cual, en lo conducente, señala que no todas las pruebas con valor probatorio, incluso pleno, suponen la eficacia demostrativa de los hechos debatidos, pues ello dependerá de su susceptibilidad para aportar elementos positivos para acreditar la pretensión, y si son negativos o ninguno, evidentemente no habrá tal eficacia.

Lo anterior, considerando además que las **pruebas documentales públicas** son sujetas a un régimen de valoración como elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria, y viceversa. Sirve a lo anterior, como criterio orientador lo establecido en la tesis VI.2o.C.289 K, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACION CON SU PRESENTANTE¹⁵. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio.

¹⁴ Consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6215; registro digital: 2021914.

¹⁵ Visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2689.

Ahora bien, por lo que respecta al acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029/2022 que tuvo como propósito certificar el expediente físico y digital del ciudadano postulado en el cargo antes mencionado, es importante tomar en cuenta lo establecido en el artículo 26 del *Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, ya que de una interpretación teleológica se tiene que el plazo de 48 horas que se tienen para la elaboración del acta y plasmar por escrito lo inspeccionado, es precisamente para mantener reciente la información y circunstancias que rodean lo que se certifica en la diligencia respectiva.

Lo cual debe entenderse a la luz del resto de los principios rectores de la oficialía electoral, que también se citan en el artículo 5 del *Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, como son el de idoneidad, forma, autenticidad, seguridad jurídica y oportunidad; puesto que, todos en conjunto muestran la intención y necesidad de actuar de forma apta para alcanzar el objetivo de expresar en el acta —de la forma más fiel posible—, lo que se observó en la inspección, por ello se exige que se redacte por escrito y oportunamente, para contribuir a la seguridad jurídica de las partes interesadas¹⁶.

En el caso, es importante considerar que, al ciudadano David Huerta Jasso se le otorgó el registro mediante los acuerdos CGIEEG/108/2021 y CGIEEG/237/2021, aprobados por este *Consejo General* **el cuatro abril y siete de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente** y, el acta de oficialía electoral identificada con la clave ACTA-OE-IEEG-SE-029/2022 solicitada por la *autoridad sustanciadora* el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós mediante el oficio UTJCE/509/2022, en la cual se certificó la existencia y contenido del expediente físico y digital de que se trata fue levantada **en fecha primero de junio de dos mil veintidós**; por lo cual se tiene que, transcurrieron **alrededor de catorce meses, entre la aprobación del registro y el levantamiento del acta de oficialía correspondiente**.

Con lo cual, no se cumplen los principios a que se refiere el artículo 5 del *Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, puesto que el acta **no se realizó en el momento idóneo y oportuno**, lo que demerita su autenticidad de

¹⁶ Véase la resolución TEEG-PES-03/2023.

lo que se plasmó en dicho documento. Lo anterior, aunado a las siguientes hipótesis relacionadas con los expedientes de registro de candidaturas:

- Que de conformidad con lo indicado en el artículo 54 de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*, **las partes interesadas pueden solicitar la devolución de la documentación** original anexa a las solicitudes de registro, contenida en los expedientes respectivos, esto una vez declarada la validez de la elección o resueltos en definitiva los medios de impugnación que se hayan interpuesto en su contra.
- Que, a efecto de resolver los medios de impugnación previstos en la *Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral*, así como en la *Ley electoral local*, las autoridades jurisdiccionales pueden **solicitar a este Instituto la documentación original o copia certificada de los expedientes de registro de candidaturas.**
- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*, **las candidatas, candidatos y los partidos políticos a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General pueden tener acceso a la documentación que integra los expedientes de registro** de sus respectivas candidaturas, así como a los demás expedientes, sujetándose a lo previsto en la *Ley electoral local*, la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato* y la *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato*.

Todo lo anterior, sin que pase desapercibido que, a efecto de brindar certeza y seguridad jurídica, resulta importante contemplar procedimientos de control y resguardo de los expedientes de registro de candidaturas, mismos que son susceptibles de valoración por parte de este *Consejo General* y de las autoridades jurisdiccionales electorales. Con lo cual, además se atienda a la credibilidad y fiabilidad en el otorgamiento de los registros correspondientes, así como en la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores relacionados éstos, como lo es en el caso que nos ocupa.

5.3.3 No se acredita la infracción imputada al ciudadano David Huerta Jasso.

Ahora bien, este *Consejo General* estima pertinente hacer un análisis a mayor abundamiento sobre los hechos, lo que de igual forma conlleva a la decisión de declarar la inexistencia de la infracción objeto de análisis, ello tomando en cuenta que, aún en el caso de que no se hubieren presentado los supuestos señalados en los puntos 5.3.1 y 5.3.2 de la presente resolución; no se actualiza la infracción objeto de análisis. Al respecto se cita como criterio orientador, por las razones esenciales que lo sustentan, la tesis CXXXV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:

SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA RAZONAMIENTOS A MAYOR ABUNDAMIENTO NO LA CONVIERTE EN UNA DE FONDO. El hecho de que una autoridad jurisdiccional realice razonamientos a mayor abundamiento en una sentencia que desecha un medio de impugnación electoral, no la convierte en una sentencia de fondo, circunstancia que es exigida en varias legislaciones estatales, así como por la federal, para la procedencia del recurso de segunda instancia. Para lo anterior, debe precisarse en primer lugar que por sentencia de fondo o de mérito, se entiende que es aquella que examina la materia objeto de la controversia y decide el litigio sometido a la potestad jurisdiccional, al establecer el derecho en cuanto a la acción y las excepciones que hayan conformado la litis, lo que no sucede en las sentencias que declaran el desechamiento del medio de impugnación, pues lo examinado y decidido no versa sobre alguna de las cuestiones planteadas en el medio impugnativo a través de los agravios formulados, sino por una causa diversa que impide, precisamente, realizar el análisis de fondo; sin que obste para lo anterior que en la resolución citada se haya realizado el análisis de la cuestión debatida a mayor abundamiento, pues tal manifestación no es el resultado de un análisis real de fondo de la controversia planteada, a través de los agravios del actor, sino una consideración hipotética, por lo que no rige los puntos resolutivos del fallo, ni cambia el sentido y naturaleza de la resolución de desechamiento del medio impugnativo de que se trate¹⁷.

- **Sindicatura suplente de Romita, Guanajuato postulada por el otrora partido político Fuerza por México.**

La *UTJCE* mediante el acuerdo del cinco de agosto de dos mil veintiuno radicó el procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG iniciado con motivo de la vista

¹⁷ Ubicable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 200 y 201.

dada por este *Consejo General* mediante el acuerdo CGIEEG/309/2021, aprobado en la sesión ordinaria efectuada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Posteriormente, mediante el oficio UTJCE/2801/2021¹⁸ la *autoridad sustanciadora* solicitó información a la *Secretaría Ejecutiva* con el propósito de que, además del expediente de registro, remitiera los oficios de requerimiento del formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente del municipio de Romita, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Dicha solicitud de información fue atendida mediante el oficio SE/3088/2021¹⁹, a través del cual se remitió la copia certificada del oficio de requerimiento REQ.RCIEEG/0201/2021²⁰ del cual se advierte que, respecto del municipio de Romita, Guanajuato la *Secretaría Ejecutiva* requirió toda la documentación de las y los integrantes de dicha planilla debido a que no se había acompañado a la solicitud de registro presentada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno²¹, entre las que destaca el formato denominado «3 de 3 contra la violencia», para lo cual se transcribe la parte conducente:

“Oficio: REQ.RCIEEG/0201/2021

Asunto: Requerimiento de registro de candidaturas

EDUARDO RAMÍREZ PÉREZ

PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

P R E S E N T E.

*Por este medio, le informo que derivado de la verificación realizada a la solicitud de registro y documentos anexos presentados ante esta Secretaría el **veintiséis de marzo de dos mil veintiuno**, mediante la cual solicita el registro de la planilla postulada para integrar el ayuntamiento de **Romita, Guanajuato**, del partido Fuerza por México, se advierte que del análisis de la documentación presentada es necesario se atienda lo siguiente:*

¹⁸ Visible a foja 51 del expediente.

¹⁹ Consultable a foja 52 del expediente.

²⁰ Véase foja 61 del expediente.

²¹ Visible a fojas 153 a 156 del expediente.

1. ...
2. **PRESENTAR** la siguiente documentación respecto de la totalidad de las y los integrantes de la planilla:

...

VII. Presentar escrito de manifestación relativo al artículo 14, fracción IX, inciso c, de los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 (declaración 3 de 3)

...”

Posteriormente, mediante el acuerdo CGIEEG/108/2021, aprobado por este Consejo General en la sesión especial efectuada el cuatro de abril de dos mil veintiuno, se estableció en los antecedentes **XI** y **XII** lo siguiente:

“Solicitud de registro

XI. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el ciudadano Eduardo Ramírez Pérez presentó, a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, la solicitud de registro de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de **Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Dolores Hidalgo C.I.N., Doctor Mora, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán, todos del estado de Guanajuato**, para contender en la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno, acompañando las documentales a que se hará referencia en el considerando 8 del presente acuerdo.

Requerimientos realizados a Fuerza por México

XII. Una vez revisada la documentación presentada en fecha veintiséis, veintisiete y treinta de marzo de dos mil veintiuno por el representante Eduardo Ramírez Pérez de Fuerza por México ante el Consejo General, se constató, por parte de este Instituto, que la solicitud de registro relativa a las planillas postuladas a contender en la elección de los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Dolores Hidalgo C.I.N., Doctor Mora, Irapuato, Guanajuato, León, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán, todos del estado de Guanajuato, no se encontraba cabalmente integrada, en razón de que no se acreditaban la totalidad de los requisitos constitucionales y legales para su registro.

En tal virtud, el propio veintinueve, treinta, treinta y uno de marzo y uno de abril de dos mil veintiuno, este Instituto notificó los requerimientos correspondientes a Fuerza por México, así como a las y los ciudadanos involucrados, a efecto de que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, presentaran la documentación faltante, corrigieran los errores correspondientes o manifestaran lo que a su interés conviniera.

El cumplimiento a los requerimientos formulados se realizó dentro de los plazos señalados; sin embargo, respecto de los requerimientos contenidos en el oficio RCIEEG/199/2021 y RCIEEG/202/2021, relativos a las planillas de candidaturas para los Ayuntamiento de Irapuato y San Francisco del Rincón, no fueron cumplidos”.

De lo antes transcrito se puede advertir que se requirió al otrora partido político Fuerza por México, a efecto de que presentara la documentación faltante o corrigiera los errores correspondientes de las solicitudes de registro relativas a las planillas de los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Dolores Hidalgo C.I.N., Doctor Mora, Irapuato, Guanajuato, León, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, **Romita**, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán, todos del estado de Guanajuato.

No obstante, se precisó que únicamente los requerimientos contenidos en los oficios RCIEEG/199/2021 y RCIEEG/202/2021, relativos a las planillas de candidaturas para los Ayuntamiento de Irapuato y San Francisco del Rincón no habían sido cumplidos. Además, se determinó el incumplimiento de los requisitos legales para la procedencia del registro de las candidaturas del otrora partido político Fuerza por México en los municipios de Acámbaro y Salvatierra.

En suma, mediante el acuerdo CGIEEG/108/2021 se registraron las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Dolores Hidalgo C.I.N., Doctor Mora, Guanajuato, León, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, **Romita**, Salamanca, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán, todos del estado de Guanajuato, y se negó el registro de las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Acámbaro,

Irapuato, Salvatierra y San Francisco del Rincón postuladas por Fuerza por México para contender en la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno.

Posteriormente dicho acuerdo fue impugnado y, mediante la sentencia emitida en el recurso de revisión identificado con la clave TEEG-REV-19-2021, el *Tribunal electoral local* determinó modificar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEEG/108/2021, en que se declaró procedente el registro de la planilla de candidaturas postulada por el otrora partido político Fuerza por México, para contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Romita.

En la citada resolución se ordenó requerir al otrora partido político Fuerza por México, para que subsanara las deficiencias advertidas y postulara candidatas y candidatos para integrar de manera completa la planilla, presentara toda la documentación atinente al registro de tales personas en términos de ley, así como para que hiciera los ajustes necesarios para que se respetara el principio de paridad de género.

No obstante, dicho requerimiento no fue cumplido, por lo que posteriormente este *Consejo General* emitió el acuerdo CGIEEG/237/2021²², mediante el cual se registró la planilla de candidatas y candidatos a integrar el ayuntamiento de Romita, postulada por el otrora partido político Fuerza por México, ello en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEEG-REV-19/2021.

En el acuerdo CGIEEG/108/2021 se analizaron los requisitos para otorgar el registro a la planilla mencionada y, en lo tocante a la presentación del formato denominado «3 de 3 contra la violencia», se estableció en el considerando **10** de dicho acuerdo que **sí se había adjuntado la totalidad de dichos escritos en que, bajo protesta de decir verdad, se manifestaba lo indicado en los incisos a), b) y c) del artículo 45 de los Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género.**

En tal sentido, este máximo órgano electoral determinó que sí se había dado cumplimiento a la obligación de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la

²² Obra a foja 142 a 152 del expediente.

violencia» por parte de las y los integrantes de la planilla de Romita, Guanajuato postulada por el otrora partido político Fuerza por México, lo cual se refirió de la siguiente manera:

«Presentación de formatos 3 de 3 contra la violencia

9. Los artículos 45 y 47 de los Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, establecen que las personas que soliciten el registro de candidaturas deberán acompañar a la solicitud, un formato en que, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, se manifieste:

a) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;

b) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y

c) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

El formato correspondiente constituye el anexo 3 de los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Conforme a ello, a las solicitudes de registro que nos ocupa sí se adjuntaron la totalidad de los escritos en que, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta lo indicado en los incisos a), b) y c) que anteceden. Por lo tanto, sí se dio cumplimiento a la obligación prevista en las disposiciones jurídicas antes citadas, la cual se reitera en el artículo 14, fracción IX, de los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.»

*Lo resaltado no es de origen.

En ese sentido, este *Consejo General* analizó el cumplimiento de los requisitos legales y mediante los acuerdos CGIEEG/108/2021 y CGIEEG/237/2021, aprobados el cuatro de abril y siete de mayo de dos mil veintiuno, otorgó el registro de la planilla de Romita, Guanajuato, postulada por el otrora partido político Fuerza por México que contendió en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Así, una vez analizadas las particularidades relacionadas con la supuesta omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de David

Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021; **se declara la inexistencia de la infracción del ciudadano David Huerta Jasso** tomando en consideración la actualización de los supuestos señalados en los puntos 5.3.1 y 5.3.2 de la presente resolución y las razones que se exponen a continuación.

En el Informe final correspondiente a la presentación del formato “3 de 3 contra la violencia» por parte de las personas postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes que contendieron en la elección de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado el seis de junio de dos mil veintiuno, presentado por parte del otrora presidente del Consejo General se indicó que el otrora partido político Fuerza por México omitió presentar el formato «3 de 3 contra la violencia», respecto de la persona postulada en la sindicatura suplente de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

No obstante, en el acuerdo CGIEEG/108/2021 **se hizo constar el cumplimiento de este requisito, esto es la presentación del formato «3 de 3 contra la violencia» de que se trata por parte del otrora partido político Fuerza por México y de David Huerta Jasso, persona postulada en el cargo referido.**

Al respecto, es importante considerar que, aún en el caso de que no se hubiere presentado dicho formato y en el acuerdo de registro se establezca que sí se presentaron, a la fecha en que se emite la presente resolución, resulta material y jurídicamente imposible reponer los referidos acuerdos de aprobación, pues atendiendo al principio de definitividad, ya no podría proveerse lo necesario para dejar insubsistentes los acuerdos de registro correspondientes. Sirve a lo anterior, la tesis LXXXV/2001, emitida por la Sala Superior de rubro y texto siguientes:

REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

- De una interpretación sistemática de los artículos 41, fracción IV, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9 párrafo 3, y 86, párrafo 1, inciso d), y párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como con los numerales 76, 77, 78 a 84 y 116 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se advierte que los acuerdos por los cuales se aprueban los registros de las candidaturas a cargos de elección popular forman parte de la etapa de preparación de la elección, por tanto, es evidente que, si la impugnación de tales registros se presenta después de que concluyó esta etapa, e incluso, con

posterioridad a la celebración de la jornada electoral, resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación que, en su caso, se hubiese cometido a través de los referidos acuerdos de aprobación, pues, aun cuando se llegare a revocar la sentencia impugnada, ya no podría proveerse lo necesario para dejar insubsistentes los acuerdos emitidos respecto del referido registro. Lo anterior, en atención al criterio sostenido por esta Sala Superior en diversas ejecutorias en el sentido de que los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos²³.

En ese tenor, si bien el presente procedimiento se instauró por la supuesta omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de la candidatura postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente de Romita, **de conformidad con lo indicado por este Consejo General en el acuerdo CGIEEG/108/2021, se advierte que pudo haberse dado cumplimiento a dicha obligación, por lo cual existe una duda razonable respecto a la presentación del formato de que se trata.**

Derivado de ello, es pertinente invocar el principio de presunción de inocencia entendido como el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos.

Lo cual también se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión; lo que quiere decir que esa posición de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia en definitiva con base en el material probatorio existente en los autos.

Dicho principio es aplicable en toda la actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado, con independencia de la materia, como sucede con los procedimientos

²³ Ubicable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 133.

sancionadores previstos la legislación electoral para tramitar y resolver las posibles infracciones que se comentan en ese ámbito.

Al respecto, la *Sala Superior* ha indicado que el principio de referencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 21/2013 de rubro y texto siguientes:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados²⁴.

Así, las sentencias que al efecto emitan las autoridades electorales deben sustentarse en elementos que demuestren, de manera indiscutible, la comisión de la infracción que se someta a su conocimiento.

En ese sentido, el principio de presunción de inocencia establece reglas que deben respetarse para evitar que se realicen actuaciones arbitrarias por parte de los órganos del Estado; entre estas, se encuentra la relativa a asignar la carga de la prueba a la parte acusadora o denunciante, o bien a la autoridad que inicia de oficio un procedimiento sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar, de

²⁴ Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año seis, número trece, dos mil trece, páginas cincuenta y nueve y sesenta.

manera indubitable, la comisión de los hechos ilícitos materia de la denuncia o queja, o del procedimiento oficioso, como lo es el caso que nos ocupa.

Además, debe respetarse el principio jurídico *in dubio pro reo*, para el caso de que no esté fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad de la parte denunciada o presuntamente infractora.

Dicho principio del derecho penal se entiende como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, lo que se traduce en una duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. Al respecto, se cita de manera orientadora la Tesis: P. V/2018 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACION DEL CONCEPTO DE “DUDA” ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO**²⁵.

Al respecto, Michelle Taruffo²⁶, en su obra denominada *“La prueba”*, define que el estándar de la prueba *“más allá de toda duda razonable”* establece que la exigencia de culpabilidad de quien se denuncia debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza.

En el caso, al configurarse una duda razonable respecto a la presentación del formato denominado *«3 de 3 contra la violencia»*, existe la posibilidad de que, para el registro de la candidatura postulada por el otrora partido político Fuerza por México en la sindicatura suplente en el municipio de Romita, el formato de que se trata pudo haberse presentado.

Por lo cual, debido a que no está demostrada de manera fehaciente la omisión de presentar el formato multicitado, el ciudadano David Huerta Jasso se mantiene protegido por el principio de presunción de inocencia. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis LIX/2001 y XVII/2005, ambas emitidas por la *Sala Superior* de rubros y textos siguientes:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos

²⁵ Ubicable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo I, página 469, con número de registro digital 2018952.

²⁶ Autor citado por la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-144/2014 y sus acumulados.

ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado²⁷.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculcado, con el material obtenido que produzca el

²⁷ Visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 121.

convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia²⁸.

Lo anterior, es congruente además con la interpretación *pro persona* en términos de lo establecido en el artículo 1 de la *Constitución*, en que se establece la obligación del Estado de garantizar irrestrictamente los derechos de las personas, así como en su caso, interpretar de la manera más favorable al pleno disfrute y goce de esa clase de derechos, de ahí que sea declarada la inexistencia de infracción de las *partes denunciadas* por la supuesta omisión de presentar el formato denominado «3 de 3 contra la violencia» para el registro de David Huerta Jasso, postulado por el otrora partido político Fuerza por México como candidato a síndico suplente de Romita.

En consecuencia, no se tiene por demostrada violación alguna a lo dispuesto en los artículos 445, inciso f) de la *LGIPE*; 347, fracción VIII de la *Ley electoral local*; 1 y 32 de los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*²⁹; 1, 45, 46 y 47 de los *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*, emitidos por este *Instituto*³⁰ y 14, fracción IX de los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021*, emitidos por este *Instituto*³¹.

²⁸ Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.

²⁹ Aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG517/2020.

³⁰ Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante el acuerdo CGIEEG/035/2021.

³¹ Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante el acuerdo CGIEEG/077/2021.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este *Consejo General* es competente para resolver el presente asunto.

SEGUNDO. La vía del procedimiento sancionador ordinario por la cual se tramitó el asunto es la correcta.

TERCERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del otrora partido político Fuerza por México, en términos de lo establecido en el considerando TERCERO de esta resolución.

CUARTO. Es **inexistente la infracción** atribuida al ciudadano David Huerta Jasso, en términos de lo establecido en el considerando QUINTO de esta resolución.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, **publíquese** en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese al ciudadano David Huerta Jasso y **por estrados** a quien se considere con interés en el presente asunto, para lo cual se deberá acompañar copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes.

Cúmplase.

La presente resolución se aprobó por mayoría de votos de las consejeras electorales, Brenda Canchola Elizarraraz y María Concepción Esther Aboites Sámano, así como de los consejeros electorales Luis Gabriel Mota y Antonio Ortiz Hernández; y voto en contra de las consejeras electorales Nora Maricela García Huitrón, Sandra Liliana Prieto de León y Beatriz Tovar Guerrero, quien anunció voto particular; que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la ley electoral local, firman esta resolución la presidenta del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.